

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras

San Juan de Pasto, seis de diciembre de dos mil dieciséis

Se profiere la sentencia que en derecho corresponda dentro de la acción de Restitución de Tierras instaurada por ***Gumercinda Chicunque Gómez***, por conducto de apoderado designado a través de la ***Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas¹***, respecto del predio denominado “***El Progreso***”, ubicado en el municipio de *El Tablón de Gómez* – Departamento de *Nariño*, corregimiento de *La Cueva*, vereda *Los Alpes*.

I. De la solicitud de Restitución y/o Formalización de Tierras

1.1 Fundamento Fático (vínculo con el predio y hechos victimizantes)

1.1.1 De la solicitud se extracta que la señora ***Gumercinda Chicunque Gómez*** se vinculó al predio “***El Progreso***”, ubicado en la vereda *Los Alpes* del corregimiento *La Cueva* en el municipio de *El Tablón de Gómez* – Departamento de *Nariño*, desde el 18 de julio de 2002 mediante contrato de compraventa que realizara su compañero permanente ***Pablo Heraldo Martínez*** con el señor ***Florencio Martínez Benavides***, negocio jurídico que no fue elevado a escritura pública ni registrado ante la oficina competente.

1.1.2 Se indica que el inmueble hace parte de un predio de mayor extensión denominado “***La Esperanza***” que se identifica con la cédula catastral N° ***52-258-00-01-0002-0232-000*** y folio de matrícula inmobiliaria N° ***246-15285***.

1.1.3 Refiere la solicitante que fue objeto de desplazamiento junto con su núcleo familiar el 16 de abril de 2003, de la vereda *Los Alpes* del corregimiento de *La Cueva* del municipio de *El Tablón de Gómez*, por cuanto en la zona se presentaron combates entre las FARC y el Ejército Nacional; la solicitante se desplazó con su familia a la vereda *Alto Corrozal* en el departamento del *Huila* durante dos meses, al cabo de ese tiempo deciden retornar a su predio.

1.1.4 Al momento del desplazamiento su grupo familiar se encontraba conformado por su compañero permanente ***Pablo Heraldo Martínez Adarme*** y sus hijas ***Anyi Paola Martínez Chicunque*** y ***Maricela Martínez Chicunque***.²

1.2 Lo pretendido en la solicitud (síntesis).

¹ En adelante la *Unidad de Restitución de Tierras o UAEGRTD*.

² Según lo indica la UAEGRTD a folio 6 del cuaderno principal.

- 1.2.1** Que se reconozca la calidad de víctimas de abandono forzado a los solicitantes y su núcleo familiar, ordenando en tal sentido la restitución con vocación transformadora de conformidad con lo preceptuado por la Ley 1448 de 2011, como uno de los componentes de la reparación integral.
- 1.2.2** Que como medida de la reparación integral se ordene la *formalización* del predio “*El Progreso*”, ubicado en el municipio de El Tablón de Gómez – Departamento de Nariño, corregimiento La Cueva, vereda Los Alpes.
- 1.2.3** En resumen, que se declaren todas las medidas de reparación y satisfacción integral en favor de la víctimas beneficiarias de la restitución o formalización de sus tierras, que propendan por el ejercicio, goce y estabilización de sus derechos consagrados por la Ley 1448 de 2011 en su Título IV.

II. Del trámite judicial de la solicitud.

La demanda es repartida al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Tumaco el 18 de diciembre de 2013 según consta en el acta individual de reparto³, el señor Juez se declara impedido para conocer del asunto mediante auto del 19 de diciembre de 2013⁴ y remite el expediente a esta Judicatura. Mediante auto del 3 de febrero del 2014⁵ se resuelve aceptar el impedimento y admitir la acción de restitución, además se decide vincular a los señores *Florencio Martínez Benavides* y *María Teresa Adarme de Martínez* en su calidad de titulares inscritos de derecho real de dominio. Se surte el requisito de publicidad en un diario de amplia circulación nacional el 14 de febrero de 2014⁶. De esta manera se cumplieron las formalidades de notificación y las consecuencias jurídicas previstas en los artículos 86 al 88 de la Ley 1448 de 2011.⁷ Posteriormente se dispuso la práctica de pruebas mediante auto del 3 de abril del 2014⁸, las cuales una vez evacuadas es procedente decidir de fondo el asunto.

III. De los Intervinientes

3.1 Procuraduría General de la Nación⁹

³ A folio 109 obra el documento referido

⁴ A folio 110 obra el auto en comentario

⁵ Obra a folios 111 al 113 del cuaderno principal la referida providencia.

⁶ Al folio 137 del cuaderno principal obra la publicación en el periódico La Republica.

⁷ A folios 138 al 141 del cuaderno principal obra la constancia de inscripción de las medidas dictadas por el Juzgado en el folio de matrícula inmobiliaria No. 246-15285

⁸ A folio 1 al 4 del cuaderno 2 obra el auto en comentario.

⁹ En los folios 133 y 134 del cuaderno principal obra la réplica del Ministerio Público.

En su momento la Agente del Ministerio Público deprecó la solicitud de llevar a cabo interrogatorio de parte a fin de que se indicara sobre los hechos de la demanda, así mismo solicitó como pruebas la información del observatorio de DDHH y DIH, Sistema de Alertas Tempranas, Comandante de Policía del Departamento de Nariño y a la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional, a fin de que informaran sobre los hechos de violencia acaecidos en la región.

3.2 Vinculados María Teresa Adarme de Martínez y Florencio Martínez Benavides – (Titulares de Derecho Real de Dominio)¹⁰

Una vez notificados y dentro del término legal para el efecto, los señores *María Teresa Adarme de Martínez y Florencio Martínez Benavides* presentan sendos escritos mediante los cuales manifiestan que no tienen interés en comparecer al proceso de restitución de tierras interpuesto por *Gumerinda Chicunque Gómez* y que reconocen los derechos que le asiste sobre el predio denominado *El Progreso*, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 246-15285 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz y código catastral 52-258-00-01-0002-0232-000 ubicado en la vereda Los Alpes del corregimiento de La Cueva del municipio de El Tablón de Gómez.

IV. CONSIDERANDOS

4.1 Legitimación y competencia.

La competencia para asumir el conocimiento y decidir de fondo la solicitud de Restitución o Formalización de la tierra está determinada por la ausencia de opositores admitidos, así como por la ubicación del predio “*El Progreso*” materia del presente asunto, ubicado en el municipio de El Tablón de Gómez – Departamento de Nariño, corregimiento La Cueva, vereda Los Alpes¹¹.

4.2 Requisito de procedibilidad.

Se encuentra debidamente probado el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 76 de la Ley 1448, tal y como se observa en la constancia de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente aportadas con la demanda¹².

¹⁰ A folios 126 al 130 del cuaderno principal obra la réplica de los vinculados

¹¹ Al respecto ver artículos 79 y 80 de la Ley 1448 de 2011.

¹² La constancia de Inscripción del predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente obra a folios 101 y 102 del cuaderno principal.

4.3 Problema Jurídico

Corresponde determinar si la señora **Gumerinda Chicunque Gómez** junto a su grupo familiar tienen derecho a la medida de reparación integral de restitución jurídica y material del predio objeto de la presente acción.

4.4 Víctimas del conflicto armado interno y titulares del derecho a la restitución.

La Ley 1448 de 2011, fue pensada por el legislador para ser aplicada dentro de un rango de acción específico y frente a unos casos concretos, desarrollando así en su artículo 3° la conceptualización de quiénes son tenidos en cuenta como víctimas del conflicto armado interno y cobijados por la ley.

Principalmente se tiene que la aplicación del concepto de *víctima* está sin lugar a dudas estrechamente ligado a la noción de *daño*, como quiera que de la acreditación de su ocurrencia depende que las personas interesadas logren ser reconocidas como *víctimas* y puedan acceder a los beneficios de la Ley 1448 de 2011¹³.

Así las cosas, frente a dicha *condición de víctima* es importante resaltar que refiere a una situación de hecho [*fáctico*¹⁴] que surge como una circunstancia objetiva, dada la existencia de un *daño* ocurrido como consecuencia de los hechos previstos en el artículo 3° *ibidem*¹⁵; independientemente de que la víctima haya declarado y se encuentre inscrita en el Registro Único de Víctimas. En igual sentido se predica de la *condición de desplazado*, puesto que no se trata de una categoría legal sino de una identificación descriptiva de su situación, que se funda en unos hechos particulares.

De la ley se infiere que son *titulares del derecho a la restitución*¹⁶ todos aquellos sujetos que ostentan relación con el predio que se pretende restituir, bien sea como propietarios o poseedores, ora como explotadores de baldíos que propendan por su adjudicación, siempre y cuando estén dentro del contexto de *abandono forzado*¹⁷ o el *despojo*¹⁸, y que hayan sido consecuencia directa o indirecta de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con *ocasión del conflicto*

¹³ Así lo expuso la Corte Constitucional en Sentencia C-052 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla

¹⁴ Sentencia C-715 de 2012

¹⁵ Sentencia C-099 de 2013 y remite a interpretaciones hechas en Sentencias C-253 A de 2012, C-715 de 2012 y C-781 de 2012.

¹⁶ Artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.

¹⁷ La definición de dicha situación se encuentra establecida en el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011.

¹⁸ *Ibidem*.

armado¹⁹, entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley.

4.5 Reparación integral y derecho a la restitución de tierras.

La Ley 1448 de 2011 se erige como una salvaguarda de derechos en favor de las víctimas del conflicto armado interno, brindando como garantías medidas de atención, asistencia y reparación integral.

Dicha reparación integral entendida como el principal objetivo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se encamina a garantizar el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y la reparación con garantías de no repetición, lo cual se pretende alcanzar desde la máxima metodológica de cinco componentes específicos: la restitución, la indemnización, la satisfacción, la rehabilitación, y las garantías de no repetición de las conductas criminales.

En lo que respecta a la restitución la Corte Constitucional²⁰ bajo los principios rectores de los desplazamientos internos²¹ y la declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas²² se refirió al tema, reconociendo el derecho a la reubicación y restitución que tiene la población desplazada por haber sufrido el flagelo del *desarraigo* y *abandono* de sus tierras, lo cual conllevó *-en los desplazados-* a consecuencias como la inestabilidad social, laboral, económica y en el peor de los casos familiar. Así las cosas, el máximo tribunal apoyado en el Decreto 250 de 2005 definió que la restitución es un derecho fundamental que debe protegerse, por el Estado, con las garantías mínimas de restablecer lo perdido y regresar las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos, dentro de un marco de justicia restaurativa.

En igual sentido, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha establecido que ante la infracción a una obligación internacional debe repararse el daño, restituyendo a la víctima a la situación en que se encontraba antes de la vulneración de sus derechos *-restitutio in integrum-*; así mismo la ONU en sus Principios y Directrices Básicos del año 2006 refirió que la restitución consistía en *“devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las*

¹⁹ Esta expresión no se traduce en una noción restrictiva del concepto que se limite a acciones propiamente militares, por el contrario, opera en la Ley 1448 y en la doctrina de la Corte Constitucional, un criterio amplio de interpretación que no se queda en un solo tipo de accionar de los actores armados, o que utilicen un determinado armamento o medios de guerra, ni mucho menos se restringe a una determinada región específicamente. El marco del conflicto armado colombiano es complejo, especial y sui generis si se quiere, donde las organizaciones armadas a la par que pueden compartir territorios, pueden disputarse su control o establecer relaciones de confrontación o cooperación dependiendo de los intereses en juego, así como los métodos, armamentos o estrategias de combate, situación que conduce a que cada vez sea más delgada la línea que separa el lograr distinguir una víctima de la delincuencia común, o del conflicto armado, siendo que para ello se requiere un ejercicio juicioso de ponderación y valoración, en el cual, cuando exista duda, debe darse prevalencia a la interpretación que favorezca a la víctima. (Sentencia C-781 de 2012)

²⁰ Ver Sentencia T-159 de 2011.

²¹ Principios Rectores de los Desplazados Internos, formulados en el año 1998 por el Secretario General de las N.U.

²² Sección II del documento.

normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario".²³

4.6 La Restitución de Tierras y la Vocación transformadora.

La reparación con vocación de integralidad, como uno de los estándares de la justicia transicional es quizá el concepto más cambiante y adaptable a cada tipología o circunstancia en que se dé la transición, pues la noción clásica del derecho a la reparación desarrolla esencialmente el objetivo de restituir a la víctima a la situación en la que se encontraba antes de ocurrida la violación de sus derechos.

En Colombia, con la expedición de la Ley 1448 de 2011, se dio un vuelco a la perspectiva de reparación, no sólo porque se pretende ejecutar en medio del conflicto, sino porque en su artículo 25 se incluyó dentro del derecho a la reparación integral que las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º tenían derecho a ser reparadas de manera *transformadora*, con lo cual se quiere significar que la reparación debe ir más allá de la situación anterior a la ocurrencia de dichas violaciones y, bajo el acompañamiento del Estado superar las condiciones de exclusión y marginalidad que estructuralmente han conllevado a la desigualdad social.

Para el caso, la restitución con criterio transformador también pretende ir más allá, pues fundada en su principio de *seguridad jurídica*²⁴ propende por medio de la titulación de la propiedad de los predios, formalizar los derechos de las víctimas para con su tierra, conllevando así a la obligación judicial de resolver los asuntos jurídicos que atenten contra este principio *-seguridad jurídica-*. En igual sentido, una vez transformada la informalidad de la relación de las víctimas con la tierra, debe pretenderse la reconstrucción de un proyecto de vida digno y estable en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas, ya que así se logrará dar cumplimiento a la vocación *transformadora de la reparación*, dentro de un concepto holístico de restitución, indemnización, satisfacción, y garantías de no repetición "*a favor de la víctima dependiendo de la vulneración de sus derechos y las características del hecho victimizante*"²⁵.

4.7 De la prescripción.

La Ley 1448 de 2011 en su artículo 72 refiere que en el caso en que la solicitud verse sobre derechos de *posesión*, su restablecimiento podrá acompañarse con la declaración de pertenencia,

²³ Principio 19, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales y derechos humanos y de violaciones graves del DIH a interponer recursos y obtener reparaciones. A/RES/60/147.

²⁴ Artículo 73 de la Ley 1448 de 2011.

²⁵ Artículo 69 de la Ley 1448 de 2011.

de conformidad con los términos señalados en la ley, en tal sentido refiere el principio de *seguridad jurídica* cuando insta a que se propenda por la titulación de la propiedad como medida de restitución.

Por tanto, el Despacho debe tener en cuenta al momento de la decisión los requisitos formales que debe contener el tipo de prescripción que se pretende, bien ordinaria o extraordinaria.

El instituto de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es un modo que posibilita a los particulares acceder a la condición de propietarios sobre los bienes muebles e inmuebles, en las condiciones que prevé la ley sustantiva civil. La razón de ser de esta figura es la consolidación de los títulos de propiedad o bien suplirlos, esto último en el evento de que la cosa sea ajena y además prescriptible.

En los artículos 2512 y 2531 del Código Civil, se establecen los requisitos indispensables para este modo adquisitivo del dominio, siendo necesario que se ejerza posesión sobre el bien, debiendo ésta ser pacífica, pública y no interrumpida; no se requiere de título y la buena fe se presume.

Sin duda el aspecto de mayor relevancia es la temporalidad de la posesión, para lo cual la ley exige que la misma se haya ejercido durante un lapso mínimo de diez (10) años (artículo 2532 del Código Civil). Adicionalmente se requiere que el bien que se pretende usucapir esté dentro del comercio humano, excluyéndose los bienes de uso público.

Lo anterior tiene apoyo en la Carta Política en los artículos 58, 60 y 63.

4.8 De las rondas hídricas como bienes de uso público.

En Sentencia de la Corte Suprema de Justicia calendada el pasado 10 de octubre de 2016, con ponencia del magistrado *Ariel Salazar Ramírez*, refirió que existen bienes que son susceptibles de dominio particular y bienes de dominio o de uso público, siendo los últimos excluidos del régimen de propiedad privada y su titularidad es exclusiva del Estado, empero, la distinción primigenia de dichos bienes ha sido desarrollada en razón a su afectación o destinación de los bienes conforme a las necesidades y fines del Estado Social de Derecho y la función pública que cumple la propiedad; conllevando a establecer un tercer grupo de propiedad que ha denominado la Corte Constitucional como estatal y excepcionalmente privada, distinguidos por su afectación al dominio público en razón al interés general.

La Constitución Política prevé los derechos ciudadanos a gozar de un ambiente sano y a la protección del medio ambiente, lo cual implica la imposición al *Estado* de proteger la diversidad e integridad del ambiente a efectos de controlar su deterioro, esta situación indefectiblemente compromete a la Administración de Justicia quien tiene la carga de reconocer los derechos y obligaciones para con el ambiente. En tal sentido el compromiso del Estado y los recursos naturales fue elevado a rango constitucional -*Artículos 79 y 80 C.P.*-, consagrando la defensa del medio ambiente como objetivo principal en el Estado Social de Derecho²⁶.

La Corte Constitucional ha denominado la Constitución de 1991 como la “*constitución ecológica*”, como quiera que regula las relaciones de la sociedad con la naturaleza en búsqueda de proteger el medio ambiente, dicha categorización implica que la propiedad privada sea “*ecologizada*”, debiendo el propietario individual no sólo respetar los derechos de los miembros de la misma sociedad (*función social de la propiedad*) sino que limita sus facultades frente a los derechos de quienes aún no han nacido (*generaciones futuras*).

No obstante, algunos recursos naturales son bienes de dominio público; otros, sin embargo, pueden ser de dominio privado, tal como lo previenen los artículos 4º y 43 del Código de Recursos Naturales, a cuyo tenor: “*Se reconocen los derechos adquiridos por particulares con arreglo a la Ley sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables*”. Empero, esos preceptos estatuyen que en cuanto a su ejercicio, tales derechos “*estarán sujetos a las disposiciones de este Código*”. Por ende se ordenará en la parte resolutive de la presente sentencia a Corponariño para que en coordinación con la Alcaldía Municipal de El Tablón de Gómez, realice el debido acompañamiento, capacitación y supervisión a las áreas de ronda hídrica para la conservación y preservación del agua del Rio Chuzalongo, tributario del rio Janacatú.

5. Del caso en concreto.

5.1 Contexto general de violencia del Municipio de El Tablón de Gómez del Departamento de Nariño – Vereda Los Alpes.

Se tiene mediante informe rendido por la Unidad de Restitución de Tierras²⁷ que el Municipio de El Tablón de Gómez del Departamento de Nariño se encuentra ubicado a 62 kilómetros al norte de San Juan de Pasto-*Capital*-, en el macizo colombiano desde donde se desprenden las tres cordilleras; está conformado por cinco corregimientos así: *i) La Cueva* compuesta por las

²⁶ Corte Constitucional C-431 de 2000

²⁷ Informe N° 003 de 2013 del conflicto armado en el corregimiento de la cuerva, vereda los Alpes del municipio de El Tablón de Gómez – Nariño- (obrante a folios 33 al 59 del cuaderno principal).

veredas Los Alpes, Plan Aradas, Campo Alegre, Los Alpes y Pitalito alto y bajo; **ii) Las Mesas** por las veredas de El Silencio, Providencia, Valmaría, María Inmaculada, El Carmelo, La Florida, San Francisco, El Plan, Gavilla Alta y Baja, El Cedro, San Rafael, Doña Juana, Puerto Esperanza, El Porvenir, Las Yungas y Puerto Nuevo; **iii) Fátima** por las veredas Valencia, El Palmar, Loma Larga, La Esmeralda, Marcella y Llano Largo, **iv) Pompeya** con las veredas de El Gurango, Sinaí, La Isla, Juanoy Alto; y finalmente **v)** la cabecera Municipal con la vereda Belén.

En la vereda Los Alpes se encuentran 250 viviendas distribuidas en cinco sectores denominados Centro, Granadillo, La Floresta, Bellavista y El Recuerdo.

La consolidación de los grupos subversivos en la región data desde los años ochenta, con la incursión del Ejército de Liberación Nacional -ELN- a través del municipio de El Tablón de Gómez, quienes posteriormente fueron suplidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-EP-, los cuales atraídos por el cultivo de la amapola de los migrantes cultivadores del Putumayo se establecieron en la región.

El control de los cultivos de amapola y el posicionamiento en la región por parte de las FARC-EP continuó durante los años noventa, en tal sentido lo aseveran el Observatorio del Programa Presidencial para los DDHH y el DIH (2002) y la Misión de Observación Electoral -MOE- (2008), continuando su relación directa con la economía del narcotráfico.

Para el 29 de agosto del año 2000 el grupo guerrillero de las FARC-EP decide atacar la estación de policía del Municipio del Tablón de Gómez destruyendo sus instalaciones, incursión que dejó heridos en ambos extremos del combate, como consecuencia de los hechos la fuerza pública abandona la región.

Ante la imponente ley del grupo guerrillero, dada la ausencia de la fuerza pública, construye carreteras que favorecen su actuar delictivo y establece campamentos base en la región, en el año 2002 secuestra a 16 jóvenes²⁸, estableciendo de tal forma el Municipio de El Tablón de Gómez como su centro de operaciones²⁹, para ese año -2002- con la ruptura de los diálogos de paz del Caguán, los frentes 6, 8, las columnas Jacobo Arenas y Arturo Medina del Bloque Conjunto Occidente y el frente 2 del bloque sur, también arremetieron en contra de las poblaciones de Buesaco, San Pablo, el corregimiento de Génova de Colón, Potosí, El Bordo, Almaguer, San José de Albán, Bolívar (Cauca), Funes y La Cruz, ocasionando igualmente el retiro de la Policía de esta región.

²⁸La Unidad de Restitución de Tierras cita archivo documental del periódico el tiempo.

²⁹Refiere la UAEGRTD que en el año 2002 las FARC-EP impidieron la jornada electoral.

En el año 2003 con el retorno de la Policía al Municipio de El Tablón de Gómez y la avanzada militar del Batallón Macheteros del Ejército Nacional a fin de combatir al frente 2 de las FARC-EP, se presentan combates en los sectores de Los Alpes y Los Alpes, durante la semana santa de ese año-14 al 26 de abril-, con apoyo del avión fantasma, así mismo, en la misma fecha los pobladores aducen haber visto a la guerrilla con cilindros de gas y morteros artesanales, y refieren que los subversivos los alertaron sobre el enfrentamiento, lo que propició que las familias se desplazaran de sus viviendas, en una mayor cantidad al corregimiento de La Cueva y otros a Campo Alegre, Puerto Nuevo y Las Aradas, un grupo minoritario se desplaza a la ciudad de Pasto. Se registra que las personas de la vereda Los Alpes retornaron en un periodo que va entre dos semanas y dos meses, sin embargo, existen personas que no han regresado, a la espera de condiciones adecuadas de seguridad.

5.2 Contexto individual de violencia de la señora Gumercinda Chicunque Gómez y su núcleo familiar.

De lo descrito y aportado en la solicitud se tiene que la señora *Gumercinda Chicunque Gómez* junto con su núcleo familiar, se desplazaron el 16 de abril de 2003 de la vereda Los Alpes del municipio de El Tablón de Gómez, por cuanto en la zona se presentaron combates entre las FARC y el Ejército Nacional; la solicitante se desplazó junto con su núcleo familiar a la vereda Alto Corrozal del departamento del Huila durante dos meses, al cabo de ese tiempo regresan a su predio.

Así mismo lo ratifica en la ampliación de declaración que rinde la solicitante ante la Unidad de Restitución de Tierras³⁰, indicando “... *nosotros salimos el 16 de abril de 2003, yo salí con mis hijas y mi esposo ese día de los enfrentamientos, nosotros nos fuimos a quedar a Buesaco, nos quedamos un día en un hotel, alcanzamos a sacar ropa poquita, en mi casa tenía cilindros de gas para vender y me decía la gente que los cilindros de gas los iban en la carretera (sic), entonces nos dio miedo y salimos, y después de eso nos fuimos para Pasto y compramos los tiquetes para irnos a Popayán y de ahí cogimos otro carro para irnos a Neiva y después se coge otro carro para irse a donde vive mi hermano, él vive en una vereda que se llama Alto Corrozal, nosotros todos estábamos en peligro, pero todos vivíamos en la misma vereda... mi núcleo familiar estuvo allá dos meses y el resto de mi familia se estuvo más tiempo, la casa quedo abandonada....*”

³⁰ Obrante a folios 28 al 31 del cuaderno principal.

La Unidad de Restitución de Tierras recibió la declaración de las señoras *Lucila Cerón Gómez y Nelly Ubeli Herrera Lasso*³¹, quienes manifestaron que conocen a la señora *Gumerinda Chicunque Gómez* hace más de 30 años y que les consta que fue desplazada junto con su grupo familiar en el mes de abril de 2003 a causa del temor que generó los enfrentamientos entre las FARC y el Ejército Nacional en la vereda Los Alpes de El Tablón de Gómez por aproximadamente dos meses y luego retornó a su predio. El Despacho les asigna credibilidad a las declarantes por provenir de personas responsivas y explicar satisfactoriamente la ciencia de sus dichos.

Así las cosas, se tiene que la información recaudada es consecuente con el contexto general de violencia, ya que para la fecha en que refiere *Gumerinda Chicunque Gómez* que abandonó su predio, el Ejército Nacional incursionó a la zona con el objetivo de combatir al frente 2 y el frente 32 de las FARC-EP presentándose enfrentamientos principalmente en los sectores del corregimiento de La Cueva.

Por tanto, la solicitante y su núcleo familiar conformado para el momento del desplazamiento por su compañero permanente *Pablo Heraldo Martínez Adarme* y sus hijas *Anyi Paola Martínez Chicunque y Maricela Martínez Chicunque*³², tuvieron la necesidad de abandonar su predio, desplazamiento ocurrido dentro del límite temporal que la ley establece para ser considerados no sólo como víctimas, sino para estar legitimados en la acción de restitución, y los hechos acaecidos se erigen de violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a normas internacionales de derechos humanos, ocurridos con ocasión del conflicto armado interno.

Aunado a lo anterior, obra a folios 67 al 70 búsqueda en la base de datos VIVANTO – Tecnología para la Inclusión Social y la Paz en la que se certifica que la solicitante se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas por Desplazamiento Forzado ocurrido el 14 de abril de 2003. En consecuencia, la calidad de víctima, al tenor del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, de los solicitantes y su núcleo familiar quedó plenamente establecida en el plenario sin que admita ninguna duda, siendo suficientes los elementos de juicio que permiten establecerlo.

5.3 Relación Jurídica de la señora Gumerinda Chicunque Gómez con el predio denominado “El Progreso” - verificación de los supuestos de la usucapión

Según se indica en la solicitud, la señora *Gumerinda Chicunque Gómez* viene ejerciendo posesión del inmueble denominado “*El Progreso*” desde el 18 de julio de 2002. Se aclara que se trata de posesión por cuanto el predio que pretende en restitución hace parte de uno de mayor

³¹ Obrante a folios 80 al 85 del cuaderno principal

³² Op. Cit. 2.

extensión denominado *La Esperanza* cuyo antecedente registral se inicia con la Resolución de Adjudicación de Predios Baldíos No. 1430 del 22 de diciembre de 1998³³ proferida por el Incoder a favor de *María Teresa Adarme de Martínez y Florencio Martínez Benavides* en la actualidad titulares del derecho real de dominio, tal y como da cuenta la anotación No. 001 del folio de matrícula inmobiliaria No. 246-15285 de la Orip de La Cruz (N). Por lo tanto, el Despacho procederá a verificar si se cumplen los requisitos legales para aplicar la figura de la *prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio*, a saber: que exista posesión pública, pacífica e ininterrumpida por un lapso de diez (10) años.

Con la finalidad de demostrar la posesión pacífica, pública e ininterrumpida en cabeza de *Gumerinda Chicunque Gómez*, como requisito de la prescripción alegada, se recaudaron en el informativo los siguientes elementos de prueba.

5.3.1 Se allegaron por parte de la UAEGRTD los informes técnico predial y de georreferenciación practicados al inmueble objeto de la solicitud, constatándose que se trata de un predio rural, el cual se encuentra alinderado de conformidad con el informe técnico allegado por la Unidad de Restitución de Tierras y adjunto a la demanda.

Así mismo, relaciona la Unidad de Tierras que el inmueble solicitado hace parte de uno de mayor extensión de propiedad de *María Teresa Adarme de Martínez y Florencio Martínez Benavides* denominado "*La Esperanza*."

5.3.2 De igual forma se recibieron por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, las declaraciones de *Lucila Cerón Gómez y Nelly Ubeli Herrera Lasso*³⁴ quienes acreditaron conocer a la señora *Gumerinda Chicunque Gómez* y que viene poseyendo el inmueble "*El Progreso*" ubicado en la vereda Los Alpes, del corregimiento La Cueva del municipio de El Tablón de Gómez por espacio superior a los 15 años y haberlo adquirido por compraventa mediante documento privado realizada por su compañero permanente y que el inmueble fue destinado a la explotación agrícola; agregan que durante ese tiempo el vecindario ha tenido a la solicitante como señora y dueña de dicho predio y que no tienen conocimiento que alguien le haya disputado la mentada posesión.

El Despacho les asigna credibilidad a las declarantes por provenir de personas serias, responsivas y explicar satisfactoriamente la ciencia de sus dichos. En este caso considera el Juzgado que dichas circunstancias, son signos inequívocos de posesión material.

³³ Ver folios 76 al 78 del cuaderno principal

³⁴ Obrante a folios 87 al 90 del cuaderno principal

5.3.3 Con las pruebas relacionadas, analizadas en su conjunto y bajo los parámetros de la Sana crítica, queda muy claro que desde el año 2002 la señora *Gumerinda Chicunque Gómez* y hasta la actualidad, no solo ha habitado el inmueble rural denominado “*El Progreso*”, ubicado en el municipio El Tablón de Gómez – Departamento de Nariño, corregimiento de La Cueva, vereda Los Alpes, sino que en dicho lapso ha venido poseyendo el mismo; posesión que se traduce en haber plantado continuamente, mejoras, y en general haberlo usufructuado el mencionado fundo, sin rendirle cuentas a nadie.

Agréguese a lo anterior que las testigos así como el vecindario en general, tiene a la aquí solicitante como dueña y señora del bien raíz en referencia y que ninguna persona le ha reclamado derecho alguno sobre el mismo; amén de que por más de diez años lo ha venido explotando junto con su familia en forma permanente y continúa³⁵. En este caso considera el Juzgado que dichas circunstancias, son signos inequívocos de posesión material.

La mentada posesión material de que trata el artículo 762 del Código Civil, como bien se sabe está compuesta por dos elementos a saber: el *habeas* o relación material con la cosa y el *ánimus* o voluntad encaminada a un fin de señorío, es decir la intención de ser dueño, lo cual implica comportarse como tal, no reconociendo a otros derechos reales iguales o superiores sobre la cosa. Aspectos estos incuestionables en el caso de marras, pues el vecindario desde el año 2001 ha tenido a la señora *Gumerinda Chicunque Gómez*, como ama y señora del inmueble cuya prescripción se reclama.

Conforme a lo cogitado, el Despacho encuentra reunidos todos y cada uno de los requisitos enunciados en el acápite de fundamentos jurídicos. La parte actora demostró la realización de actos significativos de dominio, durante un tiempo superior a los diez años, en forma pacífica, no violenta y continua, amén de exclusiva y excluyente. El inmueble que se pretende usucapir se halla afecto a la órbita de la propiedad privada. En tal virtud, se accederá entonces a la declaratoria de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio del inmueble plurinombrado.

5.4 Medidas de reparación integral en favor de *Gumerinda Chicunque Gómez* y su núcleo familiar.

Sobre este aspecto, se hace necesario, para efectos de que se le garantice el ejercicio y goce de los derechos reconocidos al desplazado en virtud de la restitución, tomar las decisiones encaminadas a la no repetición de los hechos generadores de violencia.

³⁵ De conformidad con el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 “...el desplazamiento forzado del poseedor durante el periodo establecido por el artículo 75, no interrumpirá el término de prescripción a su favor.”

En el plenario se han trasladado varios informes por parte de las entidades involucradas, quienes han puesto en conocimiento de este Juzgado los programas y planes generales y específicos que tienen para efectos de hacer efectiva la atención a la población que habita en el corregimiento de La Cueva del municipio de Tablón de Gómez, los cuales obran en el cuaderno de pruebas. Bajo ese entendido se generarán las órdenes que se consideran pertinentes y su implementación se hará conforme las condiciones así lo permitan, no sin antes advertir que para la incorporación de las víctimas a los diferentes planes y programas previstos por el Estado.

Esta Judicatura tomará las decisiones tendientes a garantizar los derechos de restitución que le incumben al solicitante. Ahora bien, en lo que concierne a las medidas de carácter general para la población de la vereda Los Alpes Corregimiento de La Cueva municipio de El Tablón de Gómez, este Juzgado ya se ha pronunciado en sentencia del 28 de marzo de 2014 dentro del proceso de restitución y formalización de tierras No. 2013-00099, en el ordenamiento DECIMO, dentro de cuyas órdenes se entienden incluidos el solicitante y su familia, por haber sufrido los mismos hechos de violencia y haberlo acreditado ante esta Autoridad Judicial.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de San Juan de El Tablón de Gómez**, administrando justicia en nombre de la República y con la autoridad constitucional y legal,

RESUELVE

Primero. RECONOCER Y PROTEGER el derecho a la **restitución y formalización** a favor de **Gumerinda Chicunque Gómez y Pablo Heraldo Martínez Adarme** identificados con cédulas de ciudadanía Nos. **27.190.585 y 98.354.796** respectivamente, en relación con el predio **“El Progreso”** ubicado en el Municipio de El Tablón de Gómez - departamento de Nariño, corregimiento La Cueva, Vereda Los Alpes.

Segundo. DECLARAR que pertenece en dominio pleno y absoluto a **Gumerinda Chicunque Gómez y Pablo Heraldo Martínez Adarme** identificados con cédulas de ciudadanía Nos. **27.190.585 y 98.354.796** respectivamente, por haberlo adquirido por prescripción extraordinaria, el siguiente bien inmueble: Un predio rural denominado **“El Progreso”**, ubicado en la vereda Los Alpes, corregimiento La Cueva del municipio de El Tablón de Gómez – Departamento de Nariño, con una extensión de **siete mil trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados (7.355 m²)**; alinderado así: por el **NORTE**: Partiendo desde el punto 1 al punto 5 en línea quebrada siguiendo dirección noreste con una distancia de 111.8 mts. con predio de Florencio Martínez; por el **ORIENTE**: Partiendo desde el punto 5 al punto 7 en línea quebrada siguiendo dirección suroeste con una distancia de 48.2 mts. con predio de Florencio Martínez;

por el **SUR**: Partiendo desde el punto 7 al punto 13 en línea quebrada siguiendo dirección suroeste con una distancia de 115.1 mts. con predio de Juan Adarme García.; por el **OCCIDENTE**: Partiendo desde el punto 13 al punto 1 en línea quebrada siguiendo dirección noroste con una distancia de 132.9 mts. con sequia al medio y predio de Alfonso Martínez. Los puntos se toman del informe técnico predial elaborado por la UAEGRTD que obra a los folios 94 al 96 del cuaderno principal, el cual hace parte de la presente sentencia.

Tercero. ORDENAR al señor **Registrador de Instrumentos Públicos de La Cruz - Nariño**, que dentro del término de los cinco días siguientes contados desde la notificación de esta providencia, **inscriba** en el folio de matrícula inmobiliaria N° **246-15285** la presente sentencia por la cual se reconoce el derecho a la restitución de tierras a los señores **Gumercinda Chicunque Gómez y Pablo Heraldo Martínez Adarme** identificados con cédulas de ciudadanía Nos. **27.190.585** y **98.354.796** respectivamente, del predio denominado **“El Progreso”** con una extensión de **siete mil trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados (7.355 m²)** ubicado en la vereda Los Alpes, corregimiento La Cueva del municipio de El Tablón de Gómez – Departamento de Nariño.

De la misma manera, se ordena que de la matrícula inmobiliaria N° **246-15285** se **segregue** un folio de matrícula para el predio **“El Progreso”** en el cual se inscriba que el mismo fue restituido a los señores **Gumercinda Chicunque Gómez y Pablo Heraldo Martínez Adarme** identificados con cédulas de ciudadanía Nos. **27.190.585** y **98.354.796** respectivamente.

Igualmente en el nuevo folio, procederá a **inscribir** la prohibición de enajenación del bien inmueble a cualquier título y por cualquier acto, por un lapso de dos años contados desde la ejecutoria del fallo, conforme a lo establecido por el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011.

Así mismo y dentro del mismo término, **cancelará** las anotaciones número **4, 5 y 6** de la Matricula Inmobiliaria N° **246-15285**.

A su vez, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 1579 del 1° de octubre de 2012, a fin de que se proceda con la actualización de la ficha catastral del inmueble No. **52-258-00-01-0002-0232-000** ante la entidad competente **-Instituto Geográfico Agustín Codazzi-**, una vez cumplido este procedimiento deberá **rendirse informe** al Juzgado en un término máximo de tres días.

Para los fines pertinentes remítase por secretaría copia de los informes técnico predial y de georreferenciación rendidos por la Unidad de Restitución de Tierras que obran a folios 86 al 96 del cuaderno principal y que hacen parte integral de la sentencia.

Cuarto. ORDENAR al *Municipio de El Tablón de Gómez*, aplique a favor de *Gumercinda Chicunque Gómez y Pablo Heraldo Martínez Adarme* identificados con cédulas de ciudadanía Nos. **27.190.585** y **98.354.796** respectivamente, la condonación y exoneración del impuesto predial, tasas y otras contribuciones, en relación con el predio objeto del presente proceso de restitución de tierras.

Quinto. ORDENAR a la *Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente* para que a través del *Grupo de Proyectos Productivos*, dentro del término de *treinta días* contados a partir de la comunicación de la presente sentencia, realicen el estudio de viabilidad para el diseño e implementación *-por una sola vez-*, del proyecto productivo integral en favor de *Gumercinda Chicunque Gómez y Pablo Heraldo Martínez Adarme* identificados con cédulas de ciudadanía Nos. **27.190.585** y **98.354.796** respectivamente y su núcleo familiar.

Una vez finalizado el término indicado deberán rendir, a este Juzgado, un informe detallado del avance de gestión.

Sexto. ORDENAR al *Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-* que dentro del plazo máximo de quince días, siguientes a la notificación de esta providencia, ingrese *-al solicitante y su núcleo familiar-*, **sin costo alguno**, a los programas de formación y capacitación técnica que tengan implementados y que les pueda servir para su auto sostenimiento.

Séptimo. ORDENAR remitir copia de la presente sentencia al *Centro de Memoria Histórica* para que en el marco de sus funciones *acopie y documente* los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno descritos en la presente decisión.

Octavo: ORDENAR a *CORPONARIÑO* para que en coordinación con la *Alcaldía Municipal de El Tablón de Gómez - Nariño*, dentro del marco de sus competencias: **(I)** realicen el debido acompañamiento, capacitación, *control y seguimiento ambiental del uso a la fuente hídrica con la cual colinda el predio objeto de restitución* cuyas características se establecieron en el numeral SEGUNDO del presente fallo; **(II)** brindar la debida asesoría y asistencia técnica sobre el adecuado manejo de las mismas, a los solicitantes de *Gumercinda Chicunque Gómez y Pablo Heraldo Martínez Adarme* identificados con cédulas de ciudadanía Nos. **27.190.585** y **98.354.796** respectivamente y su núcleo familiar. Para efectos de lo anterior, por Secretaría se remitirán los oficios pertinentes con copia del informe técnico predial y del informe de georreferenciación aportados a este asunto. Adicionalmente, se ordena a la UAEGRTD que

preste toda la información, la debida colaboración y los documentos necesarios a las entidades comprometidas en esta orden, cuando estas así lo requieran.

Noveno: ORDENAR a la *Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas* que previa verificación del cumplimiento al artículo 45 del Decreto 4829 de 2011 y artículo 2.15.2.3.1 del Decreto 1071 de 2015, y de considerarse viable, incluya a **Gumercinda Chicunque Gómez y Pablo Heraldo Martínez Adarme** identificados con cédulas de ciudadanía Nos. **27.190.585 y 98.354.796** respectivamente, para la priorización del subsidio de vivienda rural administrado por el Banco Agrario.

Parágrafo. En caso ser viable la inclusión de la solicitante y su núcleo familiar en los subsidios de vivienda deberá la *Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de Nariño* en coordinación con el *Banco Agrario de Colombia* informar a esta dependencia.

Décimo: ORDENAR al *Ministerio de Salud y Protección Social* y a la *Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV* la inclusión de **Gumercinda Chicunque Gómez y Pablo Heraldo Martínez Adarme** identificados con cédulas de ciudadanía Nos. **27.190.585 y 98.354.796** respectivamente y su núcleo familiar, en el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI), en sus modalidades individual, familiar y comunitaria respectivamente, con el fin de que pueda superar el impacto causado por los hechos victimizantes.

Décimo Primero: Respecto a las demás medidas destinadas a la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas en el Corregimiento de la Cueva del Municipio de Tablón de Gómez - Nariño, estese a lo resuelto en el ordenamiento Décimo de la sentencia del 28 de marzo de 2014 dentro del proceso de restitución de tierras No. 2013 – 00099, proferida por este Juzgado.

NOTIFÍQUESE



ROSSVAN JOHAN BLANCO CASTELBLANCO

Juez